

# Comentarios

## La marcha de la guerra

Septiembre y octubre pese a haber sido dos meses de diálogos entre el gobierno y la insurgencia, han sido dos meses típicos en la dinámica de la guerra. En estos meses también se han puesto de manifiesto algunos hechos que revelan mucho más fidedignamente que el discurso y la propaganda, la voluntad real de cada una de las partes por alcanzar soluciones negociadas o bien su clara inclinación por obtener, sobre toda consideración político-humanitaria, salidas militares. Aún más, en este tiempo se han llevado a cabo preparativos para mayores niveles de guerra y las prácticas terroristas han aumentado.

De acuerdo a los informes de la prensa nacional, originados fundamentalmente en partes proporcionados por el ejército, las zonas oriental y central siguen siendo las de mayor conflictividad bélica. En oriente, los departamentos más conflictivos del bimestre fueron Morazán, San Miguel y Usulután. En cada uno de los dos meses mencionados se registraron 14 enfrentamientos en promedio, entre choques armados y emboscadas. El departamento menos afectado fue el de La Unión, donde sólo se registraron 4 enfrentamientos en el período. El ataque más fuerte de los rebeldes en este último departamento fue contra las instalaciones del Destacamento Militar Nº 3, ubicado en la cabecera departamental. Según informes de prensa, el FMLN tuvo 59 muertos y 37 heridos en esta zona; mientras que el ejército informó haber tenido 37 muertos —entre ellos un

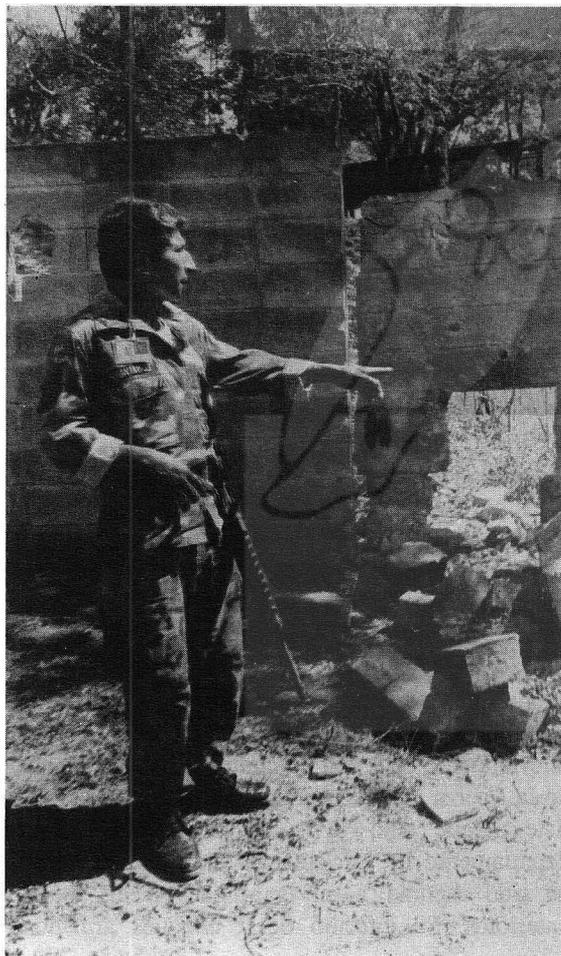
capitán caído en Morazán— y 24 heridos.

En la zona central, Chalatenango se ha mantenido como el departamento más conflictivo del país. La prensa ha informado de 19 enfrentamientos, entre ataques rebeldes y emboscadas de ambos bandos. Según el ejército, en estas acciones, la guerrilla habría sufrido 30 bajas fatales y 42 heridos, en tanto que sólo reconoció un muerto y 12 heridos en las propias filas, entre estos un teniente. En el departamento de San Salvador, y fundamentalmente en el área urbana, se registraron 14 ataques y emboscadas perpetradas por las fuerzas rebeldes, en una ciudad totalmente militarizada, en la cual el ejército ha llevado a cabo intensas operaciones de contención. Estas acciones dejaron 5 muertos y 19 heridos en las filas del ejército gubernamental; no se informó de bajas en el FMLN. La operación más notable del FMLN en la ciudad fue el fallido ataque con morteros lanzados desde plataformas móviles contra las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada, el 30 de octubre. De las 46 cargas explosivas, solamente 8 cayeron en los terrenos donde se encuentran las instalaciones militares; 30 de ellas ni siquiera se activaron. Igualmente relevante fue otro ataque contra las instalaciones de la Fuerza Aérea, en Ilopango, el 9 de octubre. Este ataque dejó 11 soldados heridos. En el departamento de La Libertad la actividad bélica ha sido esporádica, al igual que en los meses anteriores. Se informó de 7 choques armados,

entre ellos 2 ataques insurgentes a puestos militares en Quezaltepeque y sus alrededores.

En la zona paracentral, las hostilidades se han concentrado en los departamentos de San Vicente, donde se registraron 7 ataques, y de La Paz, en donde el FMLN puso 5 emboscadas fulminantes al ejército y atacó la guarnición que custodia las instalaciones de la cooperativa Entre Ríos, dejando 12 soldados muertos y 9 heridos, según las fuentes de la Fuerza Armada. En Cuscatlán solamente se registraron 4 choques armados y uno en Cabañas.

En la región occidental, el FMLN estuvo activo inusualmente en Sonsonate en octubre; se registraron 6 combates entre Nahuizalco y Sal-



coatitán, los cuales dejaron 6 guerrilleros y un soldado muertos y 6 soldados heridos, entre ellos un teniente y un subsergente. En el mismo mes, también hubo 2 choques armados en Ahuachapán, entre Ataco y Apaneca; mientras tanto, Santa Ana siguió siendo el departamento más conflictivo de la zona. En estos dos meses se registraron 15 enfrentamientos, entre ataques y emboscadas del FMLN, 6 de éstos en el municipio de Metapán y en sus alrededores.

A decir verdad, la cobertura de la prensa escrita de la marcha de la guerra sigue siendo muy inferior a la realidad de la misma. En efecto, los datos consolidados del COPREFA registran 59 acciones ofensivas del FMLN a nivel nacional en septiembre —52 de ellas contra posiciones fijas del ejército y 7 emboscadas a las patrullas militares—, todo esto sin contar los combates de encuentro producidos por la constante movilidad de ambas fuerzas. En el mismo mes, el balance del FMLN informa de 457 bajas en las filas de la Fuerza Armada y 5 helicópteros averiados.

En los meses de septiembre y octubre, la ofensiva rebelde de mayor envergadura, denominada "Alto a la represión, todos por la conquista de la democracia y la paz," se produjo entre el 25 y 26 de septiembre, al concluir el cese de fuego unilateral decretado por el FMLN durante diez días. Los ataques a la cooperativa Entre Ríos y a las instalaciones de los destacamentos N<sup>o</sup> 1, 3 y 4 (donde dañaron la pista de aterrizaje) formaron parte de esta operación de carácter nacional.

En este período, la prensa registró la destrucción de 7 unidades de transporte urbano en San Salvador y Santa Tecla y 5 vehículos estatales, 8 torres de líneas primarias de transmisión de energía y 22 postes de líneas de distribución, la destrucción de una fábrica de textiles de Quezaltepeque y daños en la maquinaria de una constructora de carreteras de San Miguel.

Este panorama bélico, sin ser exhaustivo, desvirtúa empíricamente todas las valoraciones y la intensa propaganda de la Fuerza Armada, cuyos voceros han estado repitiendo que el FMLN se encuentra sumamente debilitado e incapacitado

para operar militarmente, por lo tanto, sólo puede llevar a cabo acciones terroristas. Pese a estas declaraciones públicas, la Fuerza Armada no parece estar muy convencida de lo que dicen sus voceros porque simultáneamente ha puesto en marcha un ambicioso plan nacional de operaciones psicológicas. Parte de este plan es "Oriente 89." Según las declaraciones del comandante de la Tercera Brigada de Infantería, coronel Vargas, hechas el 31 de octubre, el plan implica un cambio importante en la estrategia contrainsurgente. Ciertamente durante la celebración de los cabildos abiertos propiciados por "el programa municipalidades en acción," financiado por la AID, se llevarían a cabo importantes operaciones de inteligencia y espionaje. Otro tanto ocurriría con los programas de acción cívica y reparto de alimentos; esto último programa forma parte del programa norteamericano denominado irónicamente "Alimentos para la paz."

De acuerdo con un amplio artículo aparecido en el *Miami Herald*, el 2 de octubre, en El Salvador dicho programa estaría siendo utilizado como carnada para luego capturar y hasta torturar a los campesinos, tal como ocurrió en enero del corriente año durante un reparto de alimentos en el cantón Las Crucitas (Usulután). En esa oportunidad, dos docenas de campesinos fueron secuestrados y torturados por el ejército, acusados de pertenecer a la guerrilla. El mismo artículo recoge versiones campesinas denunciando que los beneficiarios de los repartos son frecuentemente amenazados cuando se niegan a cooperar con el ejército. Todavía más contundentes son las declaraciones vertidas por el coronel Carlos Chávez Meléndez, asignado por el ejército para supervisar dicho programa, quien reveló que "mientras se reparten los alimentos se efectúan operaciones de inteligencia, con las que se obtiene información que después es utilizada por el ejército en sus operaciones militares."

Por otra parte, la presunta superioridad de la Fuerza Armada se ha manifestado precaria cuando para mantener su ventaja militar se opuso tenazmente a la evacuación de los lisiados del

FMLN durante cuatro meses, lo cual, además, está expresamente prohibido por los convenios de Ginebra suscritos por El Salvador. En realidad, ni el coronel Ochoa, de ARENA, ni el general Bustillo, de la Fuerza Aérea, tuvieron vergüenza para reconocer públicamente que la razón de fondo por la cual desde el principio se obstaculizó la salida de los lisiados, fue para mantener sobre las filas rebeldes la carga logística que supone atender a sus combatientes lisiados.

En realidad, por razones semejantes y porque la Fuerza Armada se encuentra empeñada en una lucha sin cuartel (con la cual aún está esperando obtener algunas ventajas militares) se negó a corresponder con un sólo gesto de buena voluntad a las medidas conciliadoras adoptadas por el FMLN para favorecer el diálogo sostenido el 13 y 14 de septiembre en México por las delegaciones rebelde y gubernamental. En efecto, desde una perspectiva y lógica puramente militar, el FMLN mostró su flexibilidad y su capacidad para hacer concesiones al decretar un cese del fuego unilateral de diez días a partir del 13 de septiembre, un cese del sabotaje contra la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, y la suspensión del uso de minas de pateo.

Pese a que el alto manto militar se empeñó en desacreditar y denunciar el incumplimiento de estas medidas por parte del FMLN, dos semanas después de haber suspendido el sabotaje, los presidentes de CEL y ANTEL reconocieron públicamente ni una sola estructura de energía ni de telecomunicaciones había sido dañada durante la suspensión del sabotaje. Por otro lado, la prensa registró una notable disminución de los enfrentamientos armados en el mismo período de cese del fuego. Sólo se registraron 12 combates de encuentro y 4 hostigamientos a posiciones militares, denunciados por el ejército. En la semana anterior al cese del fuego se registraron 16 acciones ofensivas del FMLN y 3 combates de encuentro. Estos datos muestran que con sus concesiones el FMLN le está concediendo al gobierno la mitad de la guerra, tal como lo manifestó la comandante Ana Guadalupe Martínez.

Asimismo, demuestran que con frecuencia la iniciativa militar está en manos del FMLN, para desengaño de los militares ingenuos y mentís de la propaganda desinformadora, la cual, desde que llegó ARENA al poder, nunca había sido tan agresiva e intolerante.

Las modificaciones más notables se han producido en la guerra urbana. Nunca antes, desde los años de 1980 y 1982, el terrorismo de Estado había sido tan generalizado y la represión tan marcada. Asimismo, la presencia del FMLN en la ciudad ha aumentado considerablemente en los dos últimos meses. Por un lado, la Fuerza Armada y el gobierno de ARENA consideran a la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales y de la oposición como fachada o como parte del ejército insurgente. La represión, las capturas, las torturas y las violaciones contra los miembros de estos organismos se ha hecho a título de lucha anti-subversiva. Pese a esta escalada represiva, la actividad de los comandos urbanos lejos de disminuir, ha aumentado, lo cual desvirtúa el vínculo entre insurgencia y movimiento popular que dogmáticamente atribuyen los militares.

En un artículo del *Miami Herald*, del 22 de octubre, fuentes militares informaron a dicho periódico que la escalada represiva emprendida por la Fuerza Armada obedecía a la creciente frustración experimentada dentro de sus filas, ante su impotencia para contener el sabotaje y los asesinatos y emboscadas perpetrados por el FMLN contra el personal y las instalaciones militares. Esta versión periodística ha sido corroborada por los hechos. En septiembre hubo capturas masivas de sindicalistas y cateos a las sedes de sus organizaciones, así como también a las de las instituciones humanitarias de la Iglesia y de las asociaciones campesinas. Los atropellos y torturas contra los sindicalistas de FENASTRAS por parte de la Policía Nacional probablemente le costaron el puesto a su director, coronel Guzmán Aguilar. Sin embargo, en octubre, el FMLN golpeó dura-

mente a las patrullas de la Policía Nacional y de la Policía de Hacienda. En dicho mes, las emboscadas a los cuadros militares y policiales produjeron 10 bajas, según los informes de la prensa. El mismo ataque contra las instalaciones de la Fuerza Aérea que dejó 11 heridos muestra claramente la incapacidad de la Fuerza Armada para contener las acciones urbanas del FMLN.

El 30 de octubre, el FMLN atacó las instalaciones del estado mayor de la Fuerza Armada con un dispositivo con un alcance de hasta 300 metros. El mismo coronel Ponce, en conferencia de prensa, destacó que el FMLN estaba usando mejor tecnología en sus artefactos de lanzamiento y en su poder destructivo. Posteriormente, algunas fuentes militares explicaron por qué no funcionó bien el mecanismo de los artefactos. Está fuera de discusión que el mecanismo usado tiene grandes probabilidades de obtener un alto grado de efectividad. Si no funcionó en esta ocasión, fue por causas circunstanciales. Si los explosivos hubieran alcanzado su blanco, hubieran destruido las instalaciones del estado mayor y hubieran causado bajas considerables en la plana mayor de la Fuerza Armada.

En este contexto, no es remoto suponer que el atentado criminal contra FENASTRAS perpetrado el 31 de octubre sea una respuesta desesperada y un chantaje terrorista. El atentado dejó 10 sindicalistas muertos y 30 heridos. Para el FMLN sería una advertencia, cualquier atentado contra el personal o las instalaciones militares será cobrado criminalmente en las organizaciones populares. Si bien es comprensible que la cúpula militar se encuentre atemorizada ante el crecido poder del FMLN en las zonas urbanas, no lo es que sus fuerzas atenten criminalmente contra las organizaciones populares. Con el atentado criminal contra FENASTRAS, el terrorismo militar ha dado un salto cualitativo cuyas consecuencias políticas y sociales están por verse.

B. T. U.